Código Civil y Comercial de la Nación: nuevas denominaciones.

¿Qué lugar para el AT?

Ficha de cátedra de Intervención en campos socio-jurídicos.

D'Ovidio, Ana Clara

INTRODUCCIÓN.

En las últimas décadas, la concepción “tradicional” de familia cambió, tanto en su forma como en su contenido y su significación para la sociedad.

Concomitantemente a estos cambios, se produjeron modificaciones en relación al lugar de hijos e hijas y a la concepción de la infancia en general -a partir del Paradigma de la Protección Integral inaugurado por la Convención Internacional de los Derechos del Niño sancionada en el año 1989-, así como del rol de la mujer en la familia y en la sociedad, y el cuestionamiento a la ecuación “natural” mujer=madre (Fernández, 1993).

Al mismo tiempo, el lugar de los varones en el ejercicio de la parentalidad se encuentra en proceso de cambio, ligado a movimientos de nuevas masculinidades que buscan ejercer su derecho al cuidado de los hijos e hijas.

Por último, no debemos perder de vista la construcción de nuevas modalidades de vínculos sexo-afectivos que, cabe señalar, no son nuevas, pero recientemente han logrado ser legitimadas por la legislación de nuestro país a partir de la sanción de la Ley 26.618 -conocida como Ley de Matrimonio Igualitario¹- en el año 2010.

Estos nuevos modos de vinculación, nuevas configuraciones familiares y nuevos modos de entender los derechos y deberes de las figuras parentales y de los hijos e hijas conllevan la necesidad de repensar lo instituido, con miras a implementar intervenciones y prácticas situadas que contemplen la multiplicidad y diversidad de situaciones con las que podemos encontrarnos, desde un posicionamiento anclado en el respeto de los Derechos Humanos y el interés superior de niños, niñas y adolescentes.

En este contexto, el Código Civil y Comercial de la Nación (en adelante CCyC), aprobado en el año 2014 bajo la Ley 26.994, introduce nuevas denominaciones y conceptualizaciones que vienen a regular las relaciones entre niños, niñas y adolescentes y sus progenitores.

---

¹ Ley de Matrimonio Civil, disponible en: <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/165000-169999/169608/norma.htm>

En las siguientes páginas se buscará hacer un sucinto recorrido por estas modificaciones, haciendo hincapié en aquellas cuestiones que resultan más pertinentes para los y las acompañantes terapéuticos que realicen intervenciones en el Fuero de Familia.

MODIFICACIONES TERMINOLÓGICAS QUE INTRODUCE EL CCyC

El CCyC introduce entre sus páginas modificaciones terminológicas que no se agotan en un mero cambio conceptual, sino que implican un nuevo modo de entender las relaciones familiares desde una perspectiva de género y Derechos Humanos, y que tiene como horizonte la promoción y protección de derechos de niños, niñas y adolescentes.

El propósito de todas las disposiciones jurídicas, es influir en la conducta de los hombres y dirigirlas de cierta manera. El lenguaje jurídico tiene que ser considerado, en primer lugar, como un medio para este fin. Es un instrumento de control social. (Olivercrona, 1968, p.43).

Algunas de las principales modificaciones que se introducen son las siguientes:

* Se reemplaza el término “patria potestad” por el de “responsabilidad parental”.

El CCyC, a la luz de los postulados de la Convención de los Derechos del Niño y de la Ley 26.061 (art. 7), introduce esta nueva terminología para referirse a los derechos y deberes entre padres/madres e hijos e hijas, y no a un poder sobre los hijos e hijas que nos remonta a la forma de entender a la infancia bajo la Doctrina de la Situación Irregular.

Los hijos no deben ser considerados objeto de protección, sino sujetos de pleno derecho, deben recibir protección integral y gozar de todos los derechos que tienen las personas adultas, además de un grupo de derechos específicos que se les otorga por la particularidad de que los niños se encuentran en desarrollo. Así la responsabilidad parental se entiende como una función y acompañamiento que los progenitores ejercen en interés de los hijos y deben asistirlo en la incorporación de competencias propias de las distintas etapas de desarrollo (Cataldi, 2017, p.2).

* Se reemplaza el uso del término “tenencia”, por el de “cuidado”.

Siguiendo a Myriam Cataldi (2017) podemos señalar que el uso del término “tenencia” genera un rechazo al ser traducido como “ocupación y posesión actual y corporal de

algo”, donde no queda lugar para la concepción actual del niño, niña y adolescente como sujeto de derecho.

Niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser cuidados y educados por ambos padres (arts. 7 y 18 de la CIDN). Sin embargo, *“de ordinario, es la madre la que toma a su cargo el cuidado del hijo, pues a ella se le adjudica, generalmente, la guarda de los hijos, ya sea por acuerdo de los padres o por decisión judicial”* (Cataldi, 2017, p. 3).

El Código viene a establecer una igualdad de derechos, a partir de establecer una equivalencia de responsabilidades de los progenitores en la crianza y educación de los hijos (siempre que no vaya en perjuicio del interés superior del niño), pese a la falta de vida en común, separación o divorcio.

Al pensar en términos de coparentalidad y cuidados compartidos, se busca romper con la clásica distribución de roles donde las prácticas de cuidado caen exclusivamente en las mujeres, mientras que el rol paterno es equiparado solo a la provisión de bienes materiales y sustento económico.

De esta forma, siguiendo a Myriam Cataldi (2017) podemos sostener que la participación de ambos progenitores en las tareas de cuidado no solo se concilia con los cambios que se han producido en los roles establecidos en función del sistema sexo-genérico tradicionalmente impuesto, sino que se sostiene en un principio igualitario entre el hombre y la mujer para realizar sus proyectos de vida, asegurado en diversos tratados de derechos humanos que en nuestro país tienen rango constitucional (en especial, la Convención sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer).

En este sentido, es importante señalar un triple reconocimiento de derechos:

- el derecho de los padres a ejercer el cuidado de los hijos, y el reconocimiento de la importancia de su figura en la socialización de estos;
- el derecho de las madres a compartir las tareas de cuidado, crianza y educación con el progenitor;
- el derecho de todo niño a recibir el cuidado y a mantener vínculo con ambos progenitores tras la ruptura de la unión entre los adultos.

* Se deja de hablar del “derecho de visitas”, expresión reemplazada por “derecho de comunicación”.

Se considera que la primera acepción desmerece el vínculo que debe existir entre padres e hijos, limitando la relación del padre no conviviente con su hijo a una mera “visita” sin un ejercicio pleno y fluido de su rol parental.

La comunicación no solo será un derecho (y una obligación) que tendrá el progenitor no conviviente, sino que es un derecho del niño o niña que debe ser garantizado. El Artículo 555 del CCyC establece que:

Los que tienen a su cargo el cuidado de personas menores de edad, con capacidad restringida, o enfermas o imposibilitadas, deben permitir la comunicación de estos con sus ascendientes, descendientes, hermanos bilaterales o unilaterales y parientes por afinidad en primer grado. Si se deduce oposición fundada en posibles perjuicios a la salud mental o física de los interesados, el juez debe resolver lo que corresponda por el procedimiento más breve que prevea la ley local y establecer, en su caso, el régimen de comunicación más conveniente de acuerdo a las circunstancias.

* La nueva legislación se abstiene de emplear la palabra "menor", a secas y, cuando resulta indispensable, sólo hace referencia a la persona "menor de edad".

Aquí debemos recordar las palabras de Emilio García Méndez², cuando sostiene que la Convención Internacional de los Derechos del Niño cancela definitivamente la imagen del "menor" como objeto de la compasión-represión, convirtiéndolo en niño-niña-adolescente sujeto pleno de derechos.

La Convención Internacional de los Derechos del Niño rompe con el paradigma hegemónico de la Situación Irregular que toma a los menores como objetos, instalando un paradigma de Protección Integral que parte de considerar a niños, niñas y adolescentes como sujetos plenos de derecho y personas en condición particular de desarrollo que deben ser considerados prioridad absoluta en todos los órdenes de la sociedad.

Por primera vez se considera a todos los niños y niñas del mundo objeto de protección especial por parte de los adultos y del Estado, y sujetos de un conjunto de derechos civiles y políticos que los equiparan a la condición de ciudadanos. De esta forma, niños y niñas tienen igualdad de derechos como todas las personas, y derechos específicos propios de la niñez por el particular estado de desarrollo de la infancia.

Según el Artículo 26 del CCyC de nuestro país, la persona menor de edad -menor de 18 años- va a ejercer sus derechos a través de sus representantes legales. Por su condición de sujeto de derechos y en desarrollo no poseen la autonomía plena, siendo dependientes de los adultos.

---

² García Méndez, Emilio. Prehistoria e Historia del Control Socio-Penal de la Infancia, citado por Marvin Rabanales, Op. Cit.

Sin embargo, el Principio de Autonomía Progresiva va a establecer que, en función de su edad y grado de madurez, niños, niñas y adolescentes podrán ejercer por sí mismos/as los actos que le son permitidos por el ordenamiento jurídico. Aquí, podemos señalar como ejemplos de la aplicación de este principio:

- Aspectos relativos al cuidado de su propio cuerpo
- Participación ciudadana (voto voluntario a partir de los 16 años)
- Democratización de las relaciones: derecho a ser oído
- Ejercicio de derechos patrimoniales

El principio de autonomía progresiva implica una mirada sobre la subjetividad de cada niño, niña y adolescente, con una concepción dinámica, relacional y contextual, a partir de la cual va generando distintas capacidades: de confrontar, de tolerar tensiones, de preservarse, de pedir ayuda o apoyo, de desafiar, de diferenciarse.

Podemos pensar que este principio limita y orienta la función de los padres, cuyos derechos y responsabilidades tienen por objeto la protección y desarrollo de la autonomía del niño/a en el ejercicio de sus derechos. Los adultos responsables tienen que orientar a niños y niñas para que ejerzan sus derechos, y el Estado debe respetar la responsabilidad, derechos y obligaciones de los padres.

TÍTULO VII DEL CCyC: RESPONSABILIDAD PARENTAL

En el Libro Segundo del CCyC -Relaciones de Familia-, encontramos diversos artículos que regulan las relaciones matrimoniales, uniones convivenciales, parentescos, filiaciones y adopciones. Aquí nos centraremos en el Título VII donde, en los Artículos 638 a 704, se hace referencia a la responsabilidad parental.

Responsabilidad parental

Al hablar de los principios generales de la responsabilidad parental, el Artículo 638 la conceptualiza como *“el conjunto de deberes y derechos que corresponden a los progenitores sobre la persona y bienes del hijo, para su protección, desarrollo y formación integral mientras sea menor de edad y no se haya emancipado”*.

Según el Artículo 639, la responsabilidad parental se rige por los siguientes principios:

- a) el interés superior del niño;
- b) la autonomía progresiva del hijo conforme a sus características psicofísicas, aptitudes y desarrollo. A mayor autonomía, disminuye la representación de los progenitores en el ejercicio de los derechos de los hijos;

c) el derecho del niño a ser oído y a que su opinión sea tenida en cuenta según su edad y grado de madurez.

Podemos señalar aquí como el Código hace suyos los principios de la CIDN, partiendo de una concepción del niño, niña y adolescente como sujeto de derechos. La nueva mirada igualitaria propone que las decisiones que atañen a cuidados, crianza, educación y ejercicio de derechos de los niños/as y adolescentes sean consensuadas por ambos adultos responsables, aun cuando no convivan en el mismo domicilio.

Respecto al ejercicio de la responsabilidad parental, Capítulo 2 del CCyC, se establece que la misma corresponde, en caso de convivencia con ambos progenitores, a éstos. Aquí se presume que los actos realizados por uno cuentan con la conformidad del otro progenitor, con excepción de los supuestos contemplados en el artículo 645³ (donde se establecen actos que requieren el consentimiento expreso de ambos progenitores), o que medie expresa oposición.

En aquellos casos en que se produzca cese de la convivencia, divorcio o nulidad de matrimonio, la responsabilidad parental corresponde a ambos progenitores. Sin embargo, cabe señalar que, por voluntad de los progenitores o por decisión judicial, en interés del hijo, el ejercicio se puede atribuir a sólo uno de ellos, o establecerse distintas modalidades.

En caso de muerte, ausencia con presunción de fallecimiento, privación de la responsabilidad parental o suspensión del ejercicio de un progenitor, la responsabilidad parental corresponderá al otro progenitor.

Tal como se establece en el Artículo 642, en caso de desacuerdo entre los progenitores, cualquiera de ellos puede acudir al juez competente, quien debe resolver por el procedimiento más breve previsto por la ley local, velando por la integridad del niño/a o adolescente.

Si los desacuerdos son reiterados o concurre cualquier otra causa que entorpece gravemente el ejercicio de la responsabilidad parental, el juez puede atribuirlo total o parcialmente a uno de los progenitores, o distribuir entre ellos sus funciones, por un

---

³ ARTICULO 645.- Actos que requieren el consentimiento de ambos progenitores. Si el hijo tiene doble vínculo filial se requiere el consentimiento expreso de ambos progenitores para los siguientes supuestos:
a) autorizar a los hijos adolescentes entre dieciséis y dieciocho años para contraer matrimonio;
b) autorizarlo para ingresar a comunidades religiosas, fuerzas armadas o de seguridad;
c) autorizarlo para salir de la República o para el cambio de residencia permanente en el extranjero;
d) autorizarlo para estar en juicio, en los supuestos en que no puede actuar por sí;
e) administrar los bienes de los hijos, excepto que se haya delegado la administración de conformidad con lo previsto en este Capítulo.

En todos estos casos, si uno de los progenitores no da su consentimiento o media imposibilidad para prestarlo, debe resolver el juez teniendo en miras el interés familiar.

Cuando el acto involucra a hijos adolescentes, es necesario su consentimiento expreso.

plazo que no puede exceder de dos años. El juez también puede ordenar medidas de intervención interdisciplinaria y someter las discrepancias a mediación.

El CCyC contempla la posibilidad de delegar el ejercicio de la responsabilidad parental a un pariente, en función del interés del hijo y por razones suficientemente justificadas. El acuerdo con la persona que acepta la delegación debe ser homologado judicialmente, debiendo oírse necesariamente al hijo.

Tiene un plazo máximo de un año, pudiendo renovarse judicialmente por razones debidamente fundadas, por un período más con participación de las partes involucradas.

Cabe señalar que el guardador tiene el cuidado personal del niño, niña o adolescente y está facultado para tomar las decisiones relativas a las actividades de la vida cotidiana, sin perjuicio de que los progenitores conservan la titularidad de la responsabilidad parental y mantienen el derecho a supervisar la crianza y educación del hijo en función de sus posibilidades.

Son deberes de los progenitores:

- a) cuidar del hijo, convivir con él, prestarle alimentos⁴ y educarlo;
- b) considerar las necesidades específicas del hijo según sus características psicofísicas, aptitudes y desarrollo madurativo;
- c) respetar el derecho del niño y adolescente a ser oído y a participar en su proceso educativo, así como en todo lo referente a sus derechos personalísimos;
- d) prestar orientación y dirección al hijo para el ejercicio y efectividad de sus derechos;
- e) respetar y facilitar el derecho del hijo a mantener relaciones personales con abuelos, otros parientes o personas con las cuales tenga un vínculo afectivo;
- f) representarlo y administrar el patrimonio del hijo.

En el Artículo 647 se establece explícitamente la prohibición del castigo corporal en cualquiera de sus formas, los malos tratos y cualquier hecho que lesione o menoscabe física o psíquicamente a los niños o adolescentes.

Resulta interesante señalar que en el Código también se establecen deberes de los hijos para con sus progenitores, a saber:

- a) respetar a sus progenitores;

---

⁴ En el Capítulo 5 se establece que ambos progenitores tienen la obligación y el derecho de criar a sus hijos, alimentarlos y educarlos conforme a su condición y fortuna, aunque el cuidado personal esté a cargo de uno de ellos.

La obligación de prestar alimentos a los hijos se extiende hasta los veintiún años, y comprende la satisfacción de las necesidades de los hijos de manutención, educación, esparcimiento, vestimenta, habitación, asistencia, gastos por enfermedad y los gastos necesarios para adquirir una profesión u oficio.

- b) cumplir con las decisiones de los progenitores que no sean contrarias a su interés superior;
- c) prestar a los progenitores colaboración propia de su edad y desarrollo y cuidar de ellos u otros ascendientes en todas las circunstancias de la vida en que su ayuda sea necesaria.

Extinción, privación, suspensión y rehabilitación de la responsabilidad parental

En el CCyC se contemplan diversas causales que ameritan limitaciones -temporales o permanentes- a la responsabilidad parental.

EXTINCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PARENTAL. Según el Artículo 699, la titularidad de la responsabilidad parental se extingue por:

- a) muerte del progenitor o del hijo;
- b) profesión del progenitor en instituto monástico;
- c) alcanzar el hijo la mayoría de edad;
- d) emancipación, excepto lo dispuesto en el artículo 644;
- e) adopción del hijo por un tercero, sin perjuicio de la posibilidad de que se la restituya en caso de revocación y nulidad de la adopción; la extinción no se produce cuando se adopta el hijo del cónyuge o del conviviente.

*PRIVACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PARENTAL*⁵. Según el Artículo 700, cualquiera de los progenitores queda privado de la responsabilidad parental por:

- a) ser condenado como autor, coautor, instigador o cómplice de un delito doloso contra la persona o los bienes del hijo de que se trata;
- b) abandono del hijo, dejándolo en un total estado de desprotección, aun cuando quede bajo el cuidado del otro progenitor o la guarda de un tercero;
- c) poner en peligro la seguridad, la salud física o psíquica del hijo;
- d) haberse declarado el estado de adoptabilidad del hijo.

En este punto, cabe señalar que el Artículo 700 bis incorpora otras causales para la privación de la responsabilidad parental. A saber:

- a) Ser condenado como autor, coautor, instigador o cómplice del delito de homicidio agravado por el vínculo o mediando violencia de género conforme lo previsto en el artículo 80, incisos 1 y 11 del Código Penal de la Nación, en contra del otro progenitor;
- b) Ser condenado como autor, coautor, instigador o cómplice del delito de lesiones

---

⁵ ARTÍCULO 704.- Subsistencia del deber alimentario. Los alimentos a cargo de los progenitores subsisten durante la privación y la suspensión del ejercicio de la responsabilidad parental.

previstas en el artículo 91 del Código Penal, contra el otro progenitor, o contra el hijo o hija de que se trata;

c) Ser condenado como autor, coautor, instigador o cómplice del delito contra la integridad sexual previsto en el artículo 119 del Código Penal de la Nación, cometido contra el hijo o hija de que se trata.

La privación de la responsabilidad parental puede ser dejada sin efecto por el juez si los progenitores, o uno de ellos, demuestra que la restitución se justifica en beneficio e interés del hijo (Rehabilitación de la responsabilidad parental).

SUSPENSIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PARENTAL. Según el Artículo 702, el ejercicio de la responsabilidad parental queda suspendido mientras dure:

- a) La declaración de ausencia con presunción de fallecimiento;
- b) El plazo de la condena a reclusión y la prisión por más de tres (3) años;
- c) La declaración por sentencia firme de la limitación de la capacidad por razones graves de salud mental que impiden al progenitor dicho ejercicio;
- d) La convivencia del hijo o hija con un tercero, separado de sus progenitores por razones graves, de conformidad con lo establecido en leyes especiales;
- e) El procesamiento penal o acto equivalente, por los delitos mencionados en el artículo 700 bis.

Cuidado personal y plan de parentalidad

Al abordar los deberes y derechos sobre el cuidado de los hijos (Capítulo 4) se incorporan dos denominaciones que resultan de gran interés para la práctica del AT en relación a las infancias atravesadas por un proceso judicial: cuidado personal y plan de parentalidad.

Se denomina **cuidado personal** a los deberes y facultades de los progenitores referidos a la vida cotidiana del hijo. Cuando los progenitores no conviven, el cuidado personal del hijo puede ser asumido por un progenitor o por ambos.

El cuidado personal compartido puede ser alternado (el hijo pasa períodos de tiempo con cada uno de los progenitores, según la organización y posibilidades de la familia) o indistinto (el hijo reside de manera principal en el domicilio de uno de los progenitores, pero ambos comparten las decisiones y se distribuyen de modo equitativo las labores atinentes a su cuidado).

A pedido de uno o ambos progenitores o de oficio, el juez debe otorgar, como primera alternativa, el cuidado compartido del hijo con la modalidad indistinta, excepto que no sea posible o resulte perjudicial para el hijo (Artículo 651).

Aquí cabe señalar que, en el supuesto de cuidado atribuido a uno de los progenitores, el otro tiene el derecho y el deber de fluida comunicación con el hijo. En aquellos casos donde la comunicación se ve obturada, la intervención judicial puede requerir la implementación de un Régimen Comunicacional Asistido.

Este hace referencia a aquel que se establece por mandato judicial, con el objetivo de garantizar el contacto del padre o madre no conviviente con sus hijos, a participar en la vida de estos y ejercer la función parental. Constituye una instancia que abarca un proceso integral y superador al anterior concepto de “régimen de visitas”, donde, a través de intervenciones profesionales, se trabaja con referentes parentales y afectivos del niño, cuya vinculación y posibilidades relacionales se encuentran obturadas por diferentes conflictos. Estas intervenciones siempre deberán estar guiadas por el principio del interés superior del niño, analizando las mejores opciones para que éste pueda ejercer sus derechos.

Según el Artículo 653, en el supuesto excepcional en el que el cuidado personal del hijo deba ser unipersonal, el juez debe ponderar:

- a) la prioridad del progenitor que facilita el derecho a mantener trato regular con el otro;
- b) la edad del hijo;
- c) la opinión del hijo;
- d) el mantenimiento de la situación existente y respeto del centro de vida del hijo.

La figura del cuidado personal introduce no solo deberes de los progenitores para con los hijos, sino también deberes de los padres entre sí. Aquí podemos señalar:

- Deber de comunicación: en el caso de que el cuidado sea ejercido por uno de los progenitores, el otro tiene el deber y el derecho de mantener una comunicación fluida con el hijo/a.
- Deber de colaboración: el progenitor que no vive con el niño tiene el derecho y el deber de colaborar con el progenitor que convive con el hijo.
- Deber de informar: cada progenitor debe informar al otro sobre cuestiones de educación, salud y otras relativas a la persona y los bienes de los hijos.

El **Plan de parentalidad** es un documento que puede presentarse ante el juez en situaciones en las cuales los progenitores del niño no convivan en el mismo domicilio. Debe ser elaborado procurando la participación del niño/a; y puede ser modificado en función de las necesidades del grupo familiar o del hijo/a en sus diferentes etapas.

En el mismo se detallan los compromisos de ambos progenitores respecto a la guarda, cuidado y educación de los hijos. Debe contener:

- a) lugar y tiempo en que el hijo permanece con cada progenitor;
- b) responsabilidades que cada uno asume;
- c) régimen de vacaciones, días festivos y otras fechas significativas para la familia;
- d) régimen de relación y comunicación con el hijo cuando éste reside con el otro progenitor.

Según el Artículo 656, si no existe acuerdo o no se ha homologado el plan, el juez debe fijar el régimen de cuidado de los hijos y priorizar la modalidad compartida indistinta, excepto que por razones fundadas resulte más beneficioso el cuidado unipersonal o alternado. Cualquier decisión en materia de cuidado personal del hijo debe basarse en conductas concretas del progenitor que puedan lesionar el bienestar del niño o adolescente no siendo admisibles discriminaciones fundadas en el sexo u orientación sexual, la religión, las preferencias políticas o ideológicas o cualquier otra condición.

EN LAS TRAMAS DE LA CONFLICTIVA FAMILIAR ¿QUE LUGAR PARA EL AT?

La premisa principal de una separación debería ser que los hijos no deben ni necesitan separarse de los padres, ya que la separación es de la pareja y no de los hijos. Sin embargo, en ciertas ocasiones se presentan diversas conflictivas familiares que no encuentran una vía de resolución a través de acuerdos de las partes, por medio de la palabra.

En estos casos, muchos vínculos familiares terminan judicializados, ante la necesidad de un tercero que ordene, medie y regule aquel vínculo que se ha visto desbordado.

En el contexto de una conflictiva familiar, el AT puede ser convocado a trabajar de forma interdisciplinaria, para intervenir en la resolución del conflicto.

Al ser llamados para intervenir en la resolución de una conflictiva familiar, lo primero que debemos hacer es una lectura del expediente judicial, y luego una lectura vincular de la familia y su conflictiva en las entrevistas de admisión.

El contacto con el expediente nos permitirá obtener información sobre la situación procesal -tiempo que lleva el conflicto, miembros de la familia involucrados, intervenciones previas, etc.-. Al mismo tiempo, será importante poder tomar contacto con el equipo técnico del Juzgado y los profesionales que intervengan en el caso, para así obtener mayor información que nos permita elaborar un diagnóstico situacional en torno a las relaciones familiares y llevar adelante el acompañamiento.

Entrevistas de admisión ante un régimen comunicacional

La admisión es un espacio donde, desde un primer momento, vamos a ofrecer una escucha que nos permita comprender la experiencia vivida en relación a determinadas situaciones, desde la perspectiva de las personas involucradas. Habilitar este espacio, sin juzgar, será fundamental para lograr establecer un clima de trabajo ameno, donde las personas se sientan cómodas y dispuestas a colaborar con el proceso.

Siguiendo los planteos de Hilda Abelleira y Norma Delucca (2004), podemos señalar que la potencial eficacia transformadora de nuestras intervenciones reside en la confluencia de determinadas variables, entre las cuales podemos señalar la cualidad del dispositivo que habilitamos

Nos referimos a poder ofrecer y que la familia disponga de un espacio neutral de escucha múltiple, único y diferente a todos los conocidos, en el cual se le abre la posibilidad de pensarse, escucharse y empezar a establecer alguna o varias conexiones de sentido, donde no había más que caos, confusión o certezas, vacío y encierro, hostilidad y dolor. En este espacio son mirados y escuchados por los otros que, desde sus saberes específicos preguntan, piensan, tratan de entender el sentido del conflicto vincular por el que transitan; intercambian saberes y luego resuelven, teniendo en cuenta las producciones de la familia. Se trata de ofrecer un contexto neutral, firme y sostenedor, para la apertura de las capacidades de reflexión y cambio ante la situación de demanda planteada. Y, en consecuencia, operar sobre las respuestas de cada familia. (Abelleira & Delucca, 2004, p.24).

Entre los objetivos del proceso de admisión podemos señalar:

- * realizar un rastreo de aquello que ha desencadenado el pedido del régimen comunicacional y/o de una revinculación familiar. La historización del conflicto nos permitirá hacernos un cuadro de la situación actual, lo cual nos será muy útil a la hora de pensar nuestro acompañamiento y las estrategias a implementar.
- * indagar respecto de la historia familiar de origen y las vinculaciones -para lo cual nos será muy útil el uso de un genograma-, la historia de la pareja y de los hijos.

* tomar conocimiento de la conflictiva judicial y los antecedentes de la situación actual: cuánto tiempo hace que comenzó el conflicto, cuándo comenzaron las dificultades para vincularse con los hijos, resoluciones judiciales respecto a la situación, etc.

* indagar cuáles son las expectativas respecto al establecimiento del régimen comunicacional o la revinculación, la disponibilidad para llevar adelante el proceso y qué se espera de nuestra tarea.

El encuadre de trabajo será fundamental para hacer acuerdos y obtener los consentimientos de trabajo. Explicita cuál es nuestro rol y función, al tiempo que nos permite indagar qué se espera de nuestro trabajo. Dentro del encuadre, será fundamental establecer honorarios y procedimientos, así como ciertas pautas de trabajo necesarias para llevar adelante nuestra intervención.

En nuestras intervenciones nos orientamos por el Paradigma de la Protección Integral de las infancias y adolescencias: niños, niñas y adolescentes constituyen el interés superior en nuestra práctica -dado que son más vulnerables-. De esta forma, la promoción y protección de derechos de los niños deberá guiar nuestras intervenciones y el trabajo con el sistema familiar, buscando reducir la vulnerabilidad a la que pueden estar expuestos los niños por encontrarse atravesando un proceso judicial.

En este sentido, un aspecto que es necesario destacar es la importancia de poder evaluar si se encuentran dadas las condiciones psico-sociales necesarias para poder hacer entrar en el dispositivo a las personas a vincular.

Funciones del AT en los regímenes comunicacionales

Dentro de las funciones que debe desarrollar el AT en el ámbito de los regímenes comunicacionales asistidos, podemos señalar múltiples aristas en su labor: en relación al niño, al padre/madre no conviviente, al sistema familiar en su conjunto, y al ámbito judicial.

* Intervenir con las estrategias más convenientes según cada caso, para lograr con el mayor éxito posible la revinculación familiar.

En relación al niño/a: la función del AT deberá apuntar a lograr una verdadera vinculación con sus figuras parentales, siempre guiado por el interés superior del niño. Su trabajo no sólo apuntará a preservar/restituir el vínculo afectivo con el padre/madre no conviviente, sino que permitirá reducir la vulnerabilidad del niño, al buscar minimizar los daños devenidos por el desgaste emocional que implica el atravesar un proceso judicial.

En relación al padre/madre no conviviente: la función del AT será el promover una adecuada relación con sus hijos, alentando al ejercicio del rol parental y a la implementación de un plan de parentalidad que implique respetar los derechos de los niños.

* Generar climas de diálogo y contextos positivos con las personas con las cuales intervenimos.

En relación al sistema familiar en general: el AT podrá ofrecer un espacio de contención, donde habilitar el diálogo -muchas veces obturado-, lograr acuerdos y llegar a un consenso respecto a las decisiones que involucran al niño y los modos de vincularse con él.

Observar las dinámicas y las relaciones parento-filiales posibilitará apreciar el escenario en el cual nos encontramos y, a partir de aquí, realizar intervenciones acordes. Es importante que el AT agudice la observación y la escucha, priorizando en aspectos tales como:

- Las modalidades de contacto e intercambio comunicativo -tanto verbal como no verbal- que se establecen entre adultos y niños.
- La modalidad que adopta el contacto físico. Aquí podemos tener en cuenta cuestiones tales como: ¿quién toma la iniciativa de contacto? ¿Se observa comodidad? ¿El contacto corporal varía a lo largo del encuentro? ¿Cuál es su estado emocional?
- La modalidad que adopta el contacto intersubjetivo: ¿Se establece un diálogo? ¿Quién lo inicia? ¿El adulto trata de entrar en diálogo con el AT y se desentiende del niño? ¿Es capaz el adulto de una doble atención al niño y a la AT? ¿El niño busca vincularse con el AT y no con el progenitor? ¿Evita el contacto?
- La modalidad que adopta la actividad lúdica: ¿El niño busca la participación del progenitor o se mantiene distante? ¿El adulto se involucra en el juego infantil? ¿Qué juegos se proponen?

* Llevar un registro e informar de todo lo ocurrido al equipo interdisciplinario -siempre teniendo en cuenta la importancia de respetar la confidencialidad del espacio-.

En relación al ámbito judicial: podemos pensar la función del AT en relación al Tribunal de Familia que lo convoca, a partir de su inclusión en un equipo de trabajo interdisciplinario, la realización de informes descriptivos de la tarea realizada y la participación en las audiencias en que sea requerido.

Para finalizar, podemos señalar que la familia tiene un rol fundamental en el desarrollo del individuo, ya que es el grupo de pertenencia primaria donde se van a aprender valores, creencias y costumbres, así como modos de establecer lazos afectivos.

Al mismo tiempo, introduce al niño en el grupo familiar y en el grupo socio-cultural en que la familia se desenvuelve. Las experiencias tempranas de interacción entre el niño/a con sus principales figuras de apego impactan de forma significativa -ya sea de forma positiva o negativa- en su desarrollo.

Las funciones básicas del sistema de apego son la protección, regulación emocional y la supervivencia. Sin embargo, existen situaciones de crisis en que el desarrollo saludable del vínculo de apego puede verse interrumpido; entre ellas, podemos señalar: divorcios, discusiones entre los padres, separaciones.

En casos de conflictos familiares graves, es importante estar advertidos y tener en cuenta para el diagnóstico y la intervención algunas situaciones, como pueden ser: manipulación, interferencia en vínculos con el otro progenitor, sobre adaptación, adultización, objetalización, etc. Dichos aspectos y situaciones nos permitirán ir armando una valoración diagnóstica del sistema familiar, necesaria para planificar nuestras intervenciones.

BIBLIOGRAFÍA

- **Abelleira, H. y Delucca, N.** (2004). Intervención psicológico-pericial con familias en la institución judicial. En Abelleira, H. & Delucca, N., *Clínica forense en familias. Historización de una práctica*. Buenos Aires: Lugar.
- **Cataldi, M.** (2017). La noción de coparentalidad y el derecho de los hijos a vivir en familia. Revista digital Pensamiento Civil. Disponible en: <https://www.pensamientocivil.com.ar/doctrina/2753-nocion-coparentalidad-y-derecho-hijos-vivir-familia>
- **Código Civil y Comercial de la Nación** (2014). Ley 26.994 de la República Argentina. Disponible en: <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/235000-239999/235975/texact.htm#11>
- **Fernández, A.M.** (2012). La mujer de la ilusión. Pactos y contratos entre hombres y mujeres. Buenos Aires: Paidós.
- **Olivercrona, K.** (1968). Lenguaje Jurídico y Realidad. Revista Filosofía y Derecho 2, Centro Editor de América Latina. Buenos Aires.
- **Organización de Naciones Unidas** (1979). Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

- **Organización de Naciones Unidas** (1989). Convención Internacional sobre los Derechos del Niño.